



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Demandante: YADIRA ESTHER NAVARRO ESPEJO
Demandados: ACP COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A.
Radicado: 05001 31 05 011 2019 00295 01
Sentencia: S-289

AUTO

Se accede a la sustitución de poder presentada por el apoderado principal de COLPENSIONES Dr. RICHARD GIOVANNY SUÁREZ TORRES, T.P. 103.505 del C. S. de la Judicatura, a favor del Dr. MAURICIO LARA GARCÍA, portador de la T.P. N° 273.006 del C. S. de la Judicatura, a quien se le reconoce personería judicial para actuar en los mismos términos que al apoderado principal.

De otro lado, en atención a la escritura pública 885 del 28 de agosto de 2020 allegada al expediente, así como la inscripción en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S., se le reconoce personería como apoderada judicial de PORVENIR S.A. a la Dra. PAULA ANDREA ARBOLEDA VILLA, T.P. 270.475 del C. S. de la Judicatura.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por las entidades

codemandadas, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín el día 26 de noviembre de 2021.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

YADIRA ESTHER NAVARRO ESPEJO demandó a PROTECCIÓN S.A., a PORVENIR S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la ineficacia del traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por no habersele proporcionado una información completa y comprensible, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar todos los aportes recibidos. Pretende además se condene a las demandadas a las costas del proceso.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 26 de junio de 1965; que labora en EDATEL S.A. E.S.P. desde el 29 de agosto de 1988; que la vincularon a la AFP PROTECCIÓN S.A. el 7 de febrero de 2002; que permaneció en ese fondo de pensiones hasta el 23 de junio de 2010 cuando la afiliaron a BBVA HORIZONTE S.A., hoy PORVENIR S.A.; que nunca se le informó que con el salario que devengaba le sería imposible acceder a una pensión de vejez igual o semejante a la que obtendría en el ISS; que de haber recibido una asesoría personalizada, no hubiera tramitado el traslado de régimen; que nunca le informaron las condiciones del traslado ni las diferencias entre los regímenes pensionales; y que su solicitud de retorno a COLPENSIONES ha sido negada por las entidades demandadas.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLPENSIONES acepta la fecha de nacimiento de la demandante, su afiliación a esa entidad y el posterior traslado al Régimen de Ahorro Individual, indicando que no le consta lo demás por tratarse de situaciones relacionadas con terceros que deben ser probadas en el curso del proceso. Se opuso además a las pretensiones por carecer de fundamento fáctico y jurídico. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación demandada, falta de derecho para pedir, imposibilidad jurídica para cumplir con las obligaciones pretendidas, buena fe, prescripción, compensación e imposibilidad de condena en costas.

PROTECCIÓN S.A. acepta la fecha de nacimiento de la demandante y su afiliación a esa entidad, aclarando que la decisión adoptada fue basada en una manifestación libre y voluntaria. Se opuso además a las pretensiones de la demanda al considerar que nos encontramos ante un acto existente, válido y exento de vicios del consentimiento, realizado de forma libre y espontánea. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del Sistema General de Pensiones, inexistencia de la obligación de devolver la cuota de administración y traslado de la totalidad de aportes a PORVENIR S.A.

PORVENIR S.A. solamente acepta la afiliación de la demandante a esa entidad, advirtiendo que la misma se realizó luego de entregarle una información completa que para esa época se hacía de forma verbal, cuya manifestación de voluntad se dejaba plasmada en el respectivo formulario de vinculación. Se opuso igualmente a las pretensiones de la demanda y como excepciones propuso prescripción, cobro de lo no debido por ausencia de causa, inexistencia de la obligación y buena fe.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 26 de noviembre de 2021, el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, i) DECLARÓ la ineficacia del traslado efectuado por la demandante al Régimen de Ahorro Individual administrado por PROTECCIÓN S.A. así como el posterior traslado dentro de ese mismo régimen, ORDENÁNDOLE a PORVENIR S.A., trasladar a COLPENSIONES el saldo existente en su cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos financieros; ii) ORDENÓ a ambas AFP del régimen privado la devolución de todos los conceptos recibidos durante el tiempo que la demandante estuvo afiliada a cada entidad, como cuotas de administración, seguros previsionales y aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima; iii) ORDENÓ a COLPENSIONES recibir las anteriores sumas y reactivar la afiliación de la demandante al RPMPD; y iv) CONDENÓ en costas a PROTECCIÓN S.A., PORVENIR S.A. y COLPENSIONES, fijando como agencias en derecho la suma de \$1'362.789, \$908.526 y \$454.263 respectivamente.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de PROTECCIÓN S.A. presentó recurso de apelación señalando haber realizado una excelente administración de la cuenta de ahorro individual de la demandante, lo que se evidencia con los altos rendimientos generados; ordenar ahora trasladar las cuotas de administración y de seguro previsional sería desconocer la gestión realizada y el derecho a las restituciones mutuas establecidas en el art.1746 del Código Civil, generando además un enriquecimiento sin causa para COLPENSIONES entidad que nunca administró la cuenta de ahorro individual de la demandante. Agrega que esos conceptos de cuota de administración y seguro previsional son descontados ya que la Ley 100 en su art.20 así lo autoriza para ambos regímenes, los que tienen una naturaleza diferente a la de la pensión por lo que incluso se puede hablar de

prescripción parcial. El seguro previsional es pactado con un tercero que es la aseguradora a la que mes a mes se le ha pagado para mantener vigente las pólizas que han cubierto a la demandante en caso de causarse el siniestro de invalidez o sobrevivencia.

A su turno, el apoderado de PORVENIR S.A. se refiere al deber de información en el momento que se realizó el traslado de régimen, en el que no se requería dejar constancia a través de un documento diferente al formulario de vinculación, por lo cual exigir una prueba adicional desborda las posibilidades probatorias que tiene. Dice que no se debería generar una diferenciación en cuanto al deber de información que debiera cumplirse de acuerdo al tipo de afiliado que existe. Considera que decir que conforme al art. 167 del código General del Proceso se invierte la carga de la prueba y que corresponda o pueda llegar a corresponder a la AFP acreditar qué tipo de información le otorgó a un afiliado, es muy diferente a manifestar que se está engañando a los afiliados porque una asesoría se debe de carácter verbal o que presuntamente como lo sostiene el despacho se omitió algún tipo de información. En el caso concreto, si se manifiesta que la demandante fue engañada, debió haber acreditado en qué consistió su engaño, cuáles fueron las circunstancias del engaño.

Respecto a los actos de relacionamiento, existe una norma en el código de comercio que permite la posibilidad de que esos actos que en principio nacen con defectos que pueden generar su eficacia puedan ser ratificados, así lo establece el art. 898 del código de comercio, por lo cual considera que, si para un tipo de consecuencias jurídicas se valora como ineficacia, pero para otras no, lo que se está generando es una imposibilidad de defensas de las AFP, solicita se reconsidere la posibilidad de ratificar el acto que se generó en el presente caso. De otro lado, sostiene que del interrogatorio de parte se evidencia que las respuestas son evasivas, no contesta de fondo, dicha prueba debió apreciarse de forma diferente y con las consecuencias de ley que debían aplicarse a esta conducta.

Solicita revocar lo correspondiente a la devolución de los gastos de administración y primas de seguros previsionales. El pago del seguro previsional se genera de manera mensual para el cubrimiento de los riesgos de invalidez y muerte, exigir que regrese esa prima de seguro por no haberse causado el riesgo serio alterar la situación correspondiente al contrato del seguro.

Conforme a que no se encuentran razones para declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional, ni devolver lo que corresponde a los saldos de la cuenta de ahorro individual de la demandante, solicita se revoque la condena en costas ya que considera no tendría aplicación el art. 365 del Código General del Proceso.

Finalmente, la apoderada de COLPENSIONES solicita se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se le absuelva de todas las pretensiones incoadas en su contra. No se tuvo en cuenta las manifestaciones que realizó la demandante en su interrogatorio de parte puesto que se le dio información comprensible, clara y oportuna al momento de la afiliación, tanto por PROTECCIÓN S.A. como por PORVENIR S.A. y ella misma manifestó no tener una razón clara para querer retornar a COLPENSIONES, evidenciándose que no existe un vicio en el consentimiento que pueda dar lugar a la ineficacia que hoy se debate. La pretensión de la demandante gira en torno a que la mesada pensional puede ser superior, lo que no debería ser el motivo para declarar la ineficacia del traslado ya que ello afectaría el principio de solidaridad y un detrimento patrimonial en las arcas del sector público. Finalmente solicita no se le condene en costas ya que dicha entidad ha actuado de buena fe.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término del traslado concedido a las partes, el apoderado de COLPENSIONES presentó alegatos de conclusión indicando que la sentencia de primera instancia no tiene en consideración las

implicaciones económicas y administrativas que representan y no se tiene en cuenta que no tuvo participación en el acto jurídico de traslado que se está declarando ineficaz, por lo que es un tercero de buena fe. Solicita se revoque la sentencia y de no ser así, que se ordene la devolución de todos los conceptos recibidos con motivo de la afiliación de la demandante y se revoque la condena en costas impuesta en su contra.

PORVENIR S.A. por su parte, sostiene que no existen razones fácticas o jurídicas para declarar la ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual, pero, de mantenerse la declaratoria de ineficacia de traslado, solicita no se condene al traslado de los dineros descontados por gastos de administración, especialmente por tener una destinación específica conforme lo dispone el artículo 20 de la ley 100 de 1993, ni imponer costas en su contra.

CONSIDERACIONES:

Corresponderá en esta instancia, además de resolver los temas propuestos por los apoderados de las entidades codemandadas a través de sus respectivos recursos de apelación, conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA en lo no recurrido, con el objeto de salvaguardar los intereses de COLPENSIONES, lo que implica revisar la legalidad de la sentencia proferida en primera instancia mediante la cual se declaró la ineficacia de la afiliación de la señora YADIRA ESTHER NAVARRO ESPEJO realizada al RAIS, así como las ordenes consecuenciales respecto a los dineros que cada entidad queda en la obligación de trasladar.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado plenamente acreditados, se tiene que: **i)** YADIRA ESTHER NAVARRO ESPEJO nació el 26 de junio de 1965; **(ii)** se vinculó al servicio de EDATEL S.A. E.S.P. desde el 29 de agosto de 1988; **(iii)** con el reporte de cotizaciones de PORVENIR S.A. se verifica la existencia de 335

semanas de cotización al Régimen de Prima Media; **(iv)** el 7 de febrero de 2002 suscribió el respectivo formulario de afiliación a la AFP PROTECCIÓN S.A.; y **v)** posteriormente se trasladó a la entonces AFP BBVA HORIZONTE S.A., hoy PORVENIR S.A. según formulario del 23 de junio de 2010, entidad en la que se encuentra vinculada en la actualidad.

Lo que pretende la demandante con la presente acción judicial, es que se declare ineficaz su traslado al RAIS, administrado en este caso por la AFP PROTECCIÓN S.A., y que, en consecuencia, se declare que su afiliación válida es la que corresponde a COLPENSIONES con apoyo en que recibió un asesoramiento insuficiente por parte de los promotores del fondo privado, dado que, al momento de tramitar el traslado, no se tuvo en cuenta su situación particular, lo que ocasionó que abandonara un régimen que claramente le era más favorable.

Al respecto importa reiterar, tal y como se ha dicho en múltiples providencias en las cuales se ha dirimido el tema de la ineficacia del traslado efectuado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación. Adicionalmente, se ha establecido que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba que acredite que esa obligación sí se cumplió.

Así lo ha señalado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde las sentencias 31.989 y 31.314 ambas del 9 de septiembre de 2008, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años, como ha ocurrido por ejemplo en las sentencias SL 12136 de 2014, SL 17595 de 2017, SL

1421 de 2019, SL 1452 de 2019, SL 1688 de 2019, SL 2611 de 2020, SL 1741 de 2020, SL 1741 de 2021, SL 3537 de 2021 o más recientemente la SL 1055 del 2 de marzo de 2022 y la SL 2058 del 4 de mayo de 2022, entre muchas otras. Como sentencia-hito sobre el tema, cabe destacar lo que se dijo en aquella primera providencia, la Rad. N° 31.989 de 2008:

"Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."

Del desarrollo jurisprudencial citado se pueden evidenciar una serie de ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente: (i) el juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico; (ii) el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado; (iii) le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y (iv) no es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no existen pruebas que permitan tener por acreditado que el fondo privado realizó en ese momento un análisis integral de las condiciones concretas y subjetivas de la afiliada, con expresión de las ventajas y desventajas de ambos regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que esta pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información al afiliado, al no suministrarle, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

El simple hecho de que se haya suscrito un formulario de afiliación, no puede significar que con ello la entidad cumplió con su obligación de suministrar una información completa, precisa, adecuada y oportuna, relacionada con las ventajas y desventajas de permanecer en el ISS o trasladarse al fondo privado. Dicho documento no contempla un análisis de su caso en particular que contenga una proyección de su situación pensional concreta y específica, en uno u otro régimen, sino que simplemente se trata de un formato preestablecido, en el cual solo hace constar que tomó la decisión de manera espontánea y sin presiones, cuestión, que, en rigor, no se está controvirtiendo en este evento.

Además, del interrogatorio de parte que le fuera practicado a la afiliada, no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de información. Si bien pudo haber recibido algunas explicaciones generales acerca del funcionamiento del Régimen de Ahorro Individual y los rendimientos que generarían los aportes acumulados en su cuenta de ahorro individual, ello no significa una asesoría completa, clara, detallada y precisa de todos los alcances de su decisión.

Ahora bien; tampoco es de recibo el argumento de COLPENSIONES en cuanto solicita considerar las implicaciones económicas que se pueden llegar a generar con decisiones como ésta, especialmente por existir

una eventual afectación a la sostenibilidad financiera del sistema más cuando no participó en el acto de traslado, siendo un derecho que ejerció la demandante en su momento y permitido según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003.

El principio de sostenibilidad financiera de las pensiones, entronizado en el Acto Legislativo 01 de 2005, está orientado a lograr el aseguramiento de su propia subsistencia. Esto es, se impone la garantía de que se pueda contar con los recursos necesarios para reconocer y pagar las diversas prestaciones a los afiliados al sistema, presuponiendo la limitación de los recursos disponibles, y que, por ello mismo, deben ser distribuidos de acuerdo con las necesidades de la población, buscando la efectividad de los derechos y la eficacia y solidaridad del sistema. Y para esto es indispensable asegurar el pago efectivo de las cotizaciones, aunado al concurso del Estado cuando ello sea requerido, de tal modo que el sistema sea viable para el pago de las pensiones de los actuales y futuros pensionados.

En casos como el presente, el regreso de la demandante al RPM no implica que necesariamente vaya a haber una afectación al sistema, pues a dicho fondo le llegan los dineros que la demandante alcanzó a acumular en el Régimen de Ahorro Individual. junto con los rendimientos financieros y todos aquellos conceptos recibidos por administración de los recursos, seguros y garantía de pensión mínima como más adelante se verá, sin que esté probado en el proceso que no sea posible financiar la pensión a la que pueda llegar a acceder.

Lo anterior permite dar aplicación al artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

En consecuencia, en este puntual aspecto se confirmará la decisión adoptada en primera instancia, sin que tampoco sea de recibo el argumento planteado por la AFP PORVENIR S.A. relacionado con que la demandante se trasladó dentro del mismo RAIS, lo que demostraría su intención de permanecer en ese régimen. Y no lo es porque al respecto también se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de Casación Laboral en múltiples providencias como la SL 5280 del 3 de noviembre de 2021, rad. 85801 en la que sostuvo claramente que *"... los traslados posteriores de un afiliado no pueden convalidar la actuación viciada en el traslado inicial, y como se ratificó en la sentencia CSJ SL1688-2019, las falencias en el suministro de información completa, veraz y efectiva sobre las consecuencias de un traslado, que pueden ocasionar su ineficacia, se deben examinar en el momento mismo del traslado y no con posterioridad"*.

Devolución cuotas de administración y demás conceptos.

De otro lado, en cuanto a decisión de ordenar también la devolución de las cuotas de administración y en general todos aquellos conceptos recibidos durante la afiliación de la demandante a los fondos privados, tema cuestionado en el recurso de apelación de las distintas AFPs, basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos, que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada más recientemente en las sentencias SL 5595 de 2021 y

SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.” (Resaltado por la Sala)*

De otro lado, es necesario tener en cuenta que, en la sentencia ya referida, la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue clara en establecer que la declaratoria de ineficacia de traslado cobija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el respectivo afiliado “... aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implican dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen...”.

Dijo además en esa providencia, que:

“Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante

su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal. (...)

De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado la actora, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.”

En consecuencia, la decisión deberá ser CONFIRMADA, sin que resulte procedente la declaratoria de prescripción toda vez que no se cumplen las condiciones para tal efecto según ha sido tratado en múltiples providencias como por ejemplo en la sentencia SL 2058 del 4 de mayo de 2022, rad. 89282:

“En cuanto a la excepción de prescripción, se reitera que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible. En efecto, a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria de ineficacia del acto de afiliación, en la medida que esta declaración tiene como objetivo comprobar o constatar un estado de cosas -carencia de efectos jurídicos del acto desde su nacimiento- surgido con anterioridad al inicio de la litis (CSJ SL1688-2019, reiterada en la CSJ SL1421-2019, CSJ SL4426-2019, CSJ SL4360-2019 y CSJ SL373-2021).”

Además, tampoco puede hablarse de prescripción de los dineros descontados por concepto de cuotas de administración, seguros y reaseguros y fondo de garantía de pensión mínima, toda vez que cualquier obligación que surja a cargo de la respectiva AFP, como ciertamente lo es la de restituir estos conceptos, se origina con la declaratoria de ineficacia del traslado que solo se produce con la

ejecutoria de la sentencia, sumado al hecho de que tales conceptos están llamadas a integrar el capital indispensable para la consolidación y financiación de la prestación, y en consecuencia, al estar ligados de manera indisoluble con el estatus de pensionado, no pueden estar sometidas a la prescripción.

Costas procesales.

En lo que tiene que ver con la condena en costas impuesta a cargo de COLPENSIONES, basta con señalar que el artículo 365 del Código General del Proceso ratificó el criterio objetivo en cuanto ordena que en los procesos y en las actuaciones posteriores en que haya controversia, se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto, entre otros casos.

Pero, en estos casos, la condena a COLPENSIONES a recibir el valor de los aportes realizados a la AFP del RAIS y a reactivar la afiliación de la demandante, es solo la consecuencia lógica de la orden previamente impartida en este proceso en el sentido de declarar la ineficacia de esa afiliación al RAIS, de manera que bien puede decirse que, sin esta orden, aquellas condenas no se hubieran producido. Dicho de otro modo, era inexigible otra conducta para COLPENSIONES antes de que la presente declaratoria de ineficacia del traslado se hubiere proferido, pues esta entidad no es autoridad judicial como para resolver, antes del proceso, la reclamación del demandante.

En el caso de PORVENIR, tampoco fue su actuar el que generó la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional. Es decir, la señora YADIRA ESTHER ya venía afiliada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad a la AFP PROTECCIÓN S.A. y su afiliación a PORVENIR S.A. fue producto de un movimiento dentro del mismo régimen, en tanto el traslado desde el entonces INSTITUTO DE

SEGUROS SOCIALES ya se había producido, de manera que no fue propiamente su incumplimiento al deber de información el que dio lugar al presente proceso ni a la declaratoria de ineficacia de traslado.

En consecuencia, se revocará la condena en costas impuesta a PORVENIR S.A. y a COLPENSIONES, a quienes se le ABSOLVERÁ por este concepto.

Costas en esta instancia por haber resultado vencida en el recurso, a cargo de PROTECCIÓN S.A. y a favor de la demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1 '000.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, el día 26 de noviembre de 2021, pero la **REVOCA** exclusivamente en cuanto condenó en costas a COLPENSIONES y a PORVENIR S.A., para en su lugar ABSOLVER a ambas entidades por este concepto.

Costas en esta instancia por haber resultado vencida en el recurso, a cargo de PROTECCIÓN S.A. y a favor de la demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1 '000.000.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez

Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **69ae2c7edefe503501e2f7b48673963b88431c1604ce8bcad145748dcf51483c**

Documento generado en 27/10/2022 01:44:19 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>